

**GUERRA Y TERRORISMO: EL MODELO DE ECONOMIA
DEPREDADORA DE LA GUERRA**

MIKEL BUESA

Documento de trabajo N° 50. Mayo 2005



GUERRA Y TERRORISMO: EL MODELO DE ECONOMÍA DEPREDADORA DE GUERRA *

MIKEL BUESA

Catedrático de Economía Aplicada

*Instituto de Análisis Industrial y Financiero y Departamento de Economía Aplicada II
Universidad Complutense de Madrid*

RESUMEN

En este artículo se estudia la organización de la economía del terrorismo, caracterizándola como un modelo de economía depredadora de guerra. Este modelo se configura de una manera opuesta al de la economía de movilización que se corresponde con la concepción de la guerra moderna. El terrorismo persigue la movilización política a través de la violencia que se ejerce sobre la población civil. El control del territorio se logra a través del miedo, la destrucción del capital y la violación de los derechos humanos. En tales circunstancias, para obtener los recursos materiales y financieros que necesitan, las organizaciones terroristas desarrollan actividades de saqueo, extorsión, control del mercado negro, tráfico ilícito de drogas, armas, diamantes y materias primas embargadas, blanqueo de capitales y obtención de transferencias exteriores. Las consecuencias de esta economía depredadora se plasman en una reducción del crecimiento de la economía con respecto a su nivel potencial; en una alteración de las actividades del sector público al aumentarse el gasto en defensa y seguridad; en un incremento de la inflación; y en un deterioro de las condiciones de vida de la población.

Palabras clave: *Terrorismo, Economía de guerra, Saqueo, Extorsión, Tráficos ilegales, Desarrollo económico.*

ABSTRACT

In this article it is studied the organization of the terrorism economy, characterising it like a model of predator economy military. This model is formed of a way opposed to the one of the mobilization economy that fits with the conception of the modern war. The terrorism persecutes the political mobilization through the violence that is exerted on the civil populace. The control of the territory is obtained through the fear, the destruction of the capital and the violation of the human rights. In such circumstances, to obtain the material and financial resources that need, the terrorist organizations develop activities of sacking, extortion, control of the black market, illicit drug traffic, arms, diamonds and obstructed raw materials, money laundering and obtaining of outer transferences. The consequences of this predator economy are shaped in a reduction of the growth of the economy with respect to its potential level; in an alteration of activities of the public sector when being increased the cost in defence and security; in an increase of the inflation; and in a deterioration of the conditions of life of the population.

Key words: *Terrorism, War's economy, Sacking, Extortion, Illicit traffic, Economic development.*

* Este trabajo se inscribe dentro del proyecto 06/HSE/0209/2004 financiado por la Comunidad de Madrid.

Estoy en deuda con Thomas Baumert por su atenta lectura de la primera versión de este trabajo y por sus sugerencias para ampliar alguno de los aspectos tratados, lo que me ha permitido mejorar su contenido. Lógicamente, asumo la responsabilidad de las deficiencias que pudieran advertirse por los lectores.

El terrorismo es una forma de actuación política basada en el ejercicio de una violencia sistemática, por parte de las organizaciones que lo adoptan, contra las personas y los bienes, con la que se persigue el logro de la adhesión de la población a su causa, no mediante el convencimiento ideológico, sino por el miedo, hasta doblegar la voluntad de los ciudadanos y del Estado en orden a aceptar las exigencias de aquellas. Es, en cierta manera, una forma singular de guerra cuyas acciones armadas se diseñan y ejecutan con vistas a conseguir el desistimiento de la sociedad frente a las pretensiones de dominación o de poder de las referidas organizaciones. Esta forma de guerra, como se verá con detalle a continuación, al contrario de las establecidas con el desarrollo del Estado moderno, especialmente después de las innovaciones napoleónicas, no trata de preservar el territorio propio para asentar sobre su suelo unas actividades de producción con las que sostener el esfuerzo bélico, sino que propicia su destrucción para facilitar la extracción de los recursos materiales y financieros que requiere su mantenimiento.

1. La guerra moderna y la economía de la guerra.

La concepción moderna de la guerra hace de ésta una actividad social sujeta a la política. De acuerdo con la definición clásica de Carl von Clausewitz «la guerra... es un acto de violencia para obligar al contrario a hacer nuestra voluntad»¹. Se trata de una violencia concreta, singular y diferenciada en cada caso —pues «la guerra ya no es un proceso ideal»²—, que se configura como un instrumento político en manos del Estado. La guerra podrá concebirse así como «la prosecución del tráfico político con la intervención de otros medios»³, como «un instrumento de la política»⁴ que presupone la existencia de un Estado nacional en función de cuyos intereses pueden delimitarse un *nosotros* y un *nuestro enemigo*, y puede concretarse en qué consiste *nuestra voluntad*, esa voluntad que el Estado quiere imponer a su adversario. La guerra, como actividad del Estado nacional, ha experimentado una profunda transformación a lo largo del tiempo influida por la evolución de las formas de gobierno, las tecnologías disponibles y las formas de movilización de recursos⁵.

Siguiendo el esquema elaborado por Kaldor (2001) que se recoge en el cuadro 1, se puede destacar a este respecto que, con la formación de los Estados absolutistas, verdaderos embriones del Estado moderno, se consolida a lo largo de los siglos XVII y XVIII una nueva concepción de la guerra cuyos objetivos se definen en función de la *razón de Estado*. Este concepto, cuya paternidad cabe atribuir a Armand Jean du Plessis —el cardenal de Richelieu, primer ministro de la Francia de Luis XIII— estableció que «el bienestar del Estado justificaba cualesquiera medios que se emplearan para promoverlo»⁶, de manera que, a partir de él, el interés nacional sustituyó a la idea medieval de una moral universal como elemento rector de la política, y se aceptó que,

¹ Cfr. Clausewitz (1832), pág. 17.

² Cfr. *ibidem*, pág. 23.

³ Cfr. *ibidem*, pág. 668.

⁴ Cfr. *ibidem*, pág. 674.

⁵ Véase Kaldor (2001), capítulo 2.

⁶ Cfr. Kissinger (1996), pág. 55.

para lograr la paz y la seguridad, cada Estado debía actuar en función de sus particulares intereses, identificables con los de su soberano⁷. Tales intereses —y, por tanto, los

Cuadro 1: Evolución de la guerra en el marco de los Estados nacionales.

	<i>Siglos XVII y XVIII</i>	<i>Siglo XIX</i>	<i>Principios del siglo XX</i>	<i>Finales del siglo XX</i>
Tipo de gobierno	Estado absolutista	Estado nacional	Coaliciones de Estados Estados multinacionales Imperios	Política de bloques
Objetivos de la guerra	Razón de Estado: <ul style="list-style-type: none">• Conflictos dinásticos• Fijación de fronteras	Conflicto nacional	Conflicto nacional ideológico	Conflicto ideológico
Tipo de ejército	Mercenarios Profesionales	Profesionales Servicio obligatorio	Ejércitos de masas	Elite científico–militar Ejército profesional
Técnica militar	Armas de fuego Maniobras defensivas Asedio	Ferrocarril Telégrafo Movilización rápida	Potencia de fuego a gran escala Tanques y aviones	Armas nucleares
Economía de la guerra	Cargas impositivas Empréstitos	Expansión de la administración y la burocracia	Economía de la movilización	Complejo militar – industrial

Fuente: Kaldor (2001)

objetivos de la guerra— se identifican básicamente con la continuidad dinástica de las casas reales y con los límites fronterizos nacionales, de manera que su defensa o su reivindicación se consideran legítimas, incluso cuando se emplean medios violentos para sostenerlas. No obstante, la legitimidad se circunscribe estrechamente al Estado, de forma que cualquier agente no estatal queda fuera de ella. Surge así un aspecto esencial de la configuración del Estado moderno como es que se le atribuya el monopolio del ejercicio legítimo de la violencia. Un ejercicio que, por otra parte, no es arbitrario, sino que se ve sujeto a determinadas reglas de actuación cuyo cumplimiento es imprescindible para que la guerra quede legitimada. Esas reglas aluden a los siguientes aspectos:

- La guerra sólo corresponde a los Estados soberanos, de manera que cualquier otro ejercicio armado de la violencia se considera una actividad criminal.
- La guerra, por otra parte, la hacen los soldados —mercenarios o profesionales— que han sido habilitados para involucrarse en la violencia armada en nombre del Estado. Los soldados han de estar, así, debidamente enrolados en el ejército y controlados por sus mandos; han de luchar vestidos de uniforme —y, por tanto, diferenciados de la población civil—, portando sus armas a la descubierta y obedeciendo las órdenes directas de un jefe que pueda asumir la responsabilidad de sus acciones.
- Finalmente, las acciones de esos soldados han de sujetarse al empleo de métodos honorables —lo que excluye la realización de actos ruines, como la violación de las treguas o el uso de las armas después de ser hecho prisionero—

⁷ Vid. para la formación y la práctica inicial de la razón de Estado, el capítulo tres de Kissinger (1996).

y deben orientarse contra los enemigos combatientes, contra los soldados del ejército contrario, debiendo dejarse tranquila a la población civil siempre que lo permitan las necesidades militares.

Para sostener el esfuerzo bélico desarrollado por ejércitos permanentes, los Estados tuvieron que articular los procedimientos necesarios para allegar los recursos financieros requeridos. Se estableció así una Administración capaz de recaudar impuestos y de negociar empréstitos, organizando de esta manera las finanzas del Estado de acuerdo con las necesidades de un gasto militar que, durante el siglo XVIII, suponía en torno a tres cuartos del gasto público total⁸. En definitiva, la economía de la guerra gravitaba sobre la administración del sistema fiscal bajo el principio implícito de que al soberano le correspondía la protección de sus súbditos y, a cambio, éstos debían asumir la carga de los gastos correspondientes.

Con la consolidación del Estado nacional y la experiencia de las guerras napoleónicas, entre el final del siglo XVIII y el comienzo del XIX, algunos de los aspectos antes enunciados cobraron un nuevo significado. Así, los objetivos de la guerra se ampliaron al identificarse nuevos intereses nacionales, especialmente los relacionados con el afán de expansión territorial o con la ampliación del área de influencia internacional. Además, la guerra se hizo popular, en el sentido de que, en ella, empezó a participar todo el pueblo al hacerse obligatorio el servicio militar. Esta innovación, introducida por Napoleón en Francia, condujo a la formación de ejércitos muy numerosos y, con ellos, a la necesidad de armar, transportar y abastecer a centenares de miles de soldados. Sobre esta base, un importante conjunto de avances tecnológicos, que se desarrollaron sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX, contribuyó a revolucionar la técnica de la guerra. Se trata, fundamentalmente, de la incorporación del ferrocarril a la logística por su aptitud para el transporte masivo de tropas y pertrechos —lo que se hizo por primera vez en 1870–71, durante la guerra franco-prusiana—; del empleo del telégrafo en las comunicaciones militares —lo que se derivó de las innovaciones introducidas por Werner von Siemens, en 1868, con ocasión de la guerra entre Prusia y Dinamarca—, acelerando así la transmisión de órdenes e información; y de la aplicación de las tecnologías manufactureras a la producción de armamento, lo que en los casos de Alemania y Gran Bretaña, sobre todo con la adopción de programas de construcción naval de guerra, daría lugar a la aparición de un incipiente complejo militar-industrial⁹. Y a todo ello se añadió, en el plano organizativo, la formación de alianzas militares estables que propiciarían, ya en el siglo XX, el desencadenamiento de guerras de alcance mundial.

En este contexto de cambio en la configuración de las actividades bélicas se inscribe la codificación de las leyes de la guerra, lo que dará lugar a la formación del derecho internacional humanitario. Éste, cuya doble finalidad no es otra que la limitación de la capacidad de destrucción bélica y la evitación de cualquier sufrimiento

⁸ Vid. para una extensa consideración de este punto, Kennedy (1994), capítulo III. Este autor señala, con relación a Francia, el Imperio Habsburgo, Prusia, Gran Bretaña y Rusia, que las finanzas fueron «mucho más importantes que cualquiera de las mejoras estrictamente militares para explicar la posición relativa ocupada por las grandes potencias entre 1660 y 1815»; cfr. *ibidem*, pág. 113.

⁹ En Kennedy (1994), capítulo V, se examinan estos y otros elementos para los casos concretos de Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Rusia, Austria —Hungria y Japón.

que resulte innecesario para alcanzar los objetivos militares¹⁰, se vio impulsado principalmente, a raíz de la batalla de Solferino, por el ginebrino Jean–Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja Internacional¹¹. Fue, en efecto, después de la fundación de esta organización en 1863, cuando se acordó la primera Convención de Ginebra y se recuperaron así «las antiguas tradiciones militares del honor, aplicándolas a la guerra democrática» y se extendieron «las normas de conducta en cuanto a la asistencia a los heridos y el recuerdo de los muertos... al hombre común»¹², dando lugar a la codificación del «honor de los guerreros europeos»¹³ y a su universalización. A esa Convención seguirán hasta nuestros días, como muestra el cuadro 2, otros múltiples instrumentos jurídicos con el fin de regular el tratamiento de los prisioneros, los no combatientes, los heridos y enfermos, el concepto de necesidad militar, la delimitación de las armas y las tácticas prohibidas, la sanción de los criminales de guerra, el genocidio y otros aspectos.

Cuadro 2: Evolución del derecho internacional de la guerra.

<i>Año</i>	<i>Norma</i>	<i>Aspectos regulados</i>
1864	Convención de Ginebra	Heridos de las fuerzas armadas en campaña
1868	Declaración de San Petersburgo	Renuncia al empleo de proyectiles explosivos
1899	Declaración de La Haya	Leyes y costumbres de la guerra terrestre
1925	Protocolo de Ginebra	Prohibición de gases asfixiantes y venenosos y medios bacteriológicos
1929	Convenio de Ginebra	Heridos y enfermos de las fuerzas armadas terrestres
1945	Estatuto de Nuremberg	Enjuiciamiento y castigo de criminales de guerra. Carta del Tribunal Militar Internacional
1948	Convenio sobre el Genocidio	Prevención y sanción del crimen de genocidio
1949	I Convenio de Ginebra	Heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña
1949	II Convenio de Ginebra	Heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar
1949	III Convenio de Ginebra	Tratamiento de los prisioneros de guerra
1949	IV Convenio de Ginebra	Protección de los civiles en tiempos de guerra
1954	Convenio sobre Bienes Culturales	Protección de bienes culturales en los conflictos armados
1972	Convención sobre Armas Biológicas	Prohibición de armas bacteriológicas, biológicas y tóxicas
1977	Protocolo adicional I	Protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales
1977	Protocolo adicional II	Protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales
1980	Convenio sobre Armas Convencionales	Prohibición o restricción del uso de armas convencionales excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados
1980	Protocolo I	Fragmentos no localizables
1980	Protocolo II	Empleo de minas, armas trampa y otros artefactos
1980	Protocolo III	Empleo de armas incendiarias
1993	Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia	Enjuiciamiento de los responsables de genocidio y otras violaciones del derecho internacional en Yugoslavia a partir de 1991
1994	Tribunal Penal Internacional para Rwanda	Enjuiciamiento de los responsables de genocidio y otras violaciones del derecho internacional en Rwanda y los estados vecinos en 1994
1994	Personal de Naciones Unidas	Seguridad del personal de Naciones Unidas
1995	Protocolo IV	Armas láser cegadoras
1996	Protocolo II	Prohibición del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos
1997	Tratado de Ottawa	Prohibición de minas antipersonales
1998	Estatuto de Roma	Estatuto del Tribunal Penal Internacional
1999	Convenio sobre Bienes Culturales	Segundo protocolo del Convenio sobre Bienes Culturales
2000	Convenio sobre Derechos del Niño	Protocolo sobre participación de los niños en los conflictos armados

Fuente: Elaborado a partir de Gutman y Rieff (2003)

¹⁰ Vid. para una consideración general del derecho internacional humanitario, Bouchet –Saulnier (2003).

¹¹ Sobre este punto puede verse Ignatieff (2001), págs. 153 y ss.; y, con afán de síntesis, Ignatieff (2003).

¹² Cfr. Ignatieff (2001), pág. 159.

¹³ Cfr. *Ibidem*, pág. 164.

Y, por otra parte, la economía de la guerra adquirió una creciente complejidad, de manera que, apoyándose en un aparato burocrático-administrativo cada vez más extenso, se orientó no sólo hacia la obtención de los caudales con los que afrontar el gasto bélico, sino también hacia la producción y distribución del armamento y los pertrechos militares. Surge así el embrión de la economía de movilización que adquirirá su plena configuración con el despuntar del siglo XX. Una economía que, asentada firmemente sobre el territorio nacional, buscará la activación de todos los recursos nacionales —financieros, humanos, tecnológicos, agrarios e industriales— para sostener la guerra; y que, bajo el concepto de «guerra total» desarrollado por el general Ludendorff¹⁴, engloba una multiplicidad de actividades productivas, logísticas, administrativas y de propaganda sujetas a una planificación centralizada.

En el curso del siglo XX, sustentados sobre la experiencia de dos guerras mundiales y del largo período de guerra fría —en el que el nivel potencial de enfrentamiento entre los bloques formados por las naciones democráticas y las comunistas, llegó a extremos hasta entonces desconocidos— los elementos precedentes acabaron adquiriendo todo su desarrollo. Así, la justificación de la guerra por los intereses nacionales se extendió hacia los de las coaliciones de Estados hasta llegar a la organización de bloques militares permanentes —como es el caso de la OTAN o del Pacto de Varsovia—. Por otra parte, a raíz de la Segunda Guerra Mundial —que fue concebida por las naciones aliadas como una guerra contra el mal—, la fijación de los objetivos de la acción bélica dejó de estar determinada sólo por los conflictos nacionales, para dar entrada a las rivalidades ideológicas. Además, los ejércitos fueron ya, para siempre, ejércitos de masas que reclutaban a una multitud de soldados. Las tecnologías militares —basadas en complejos sistemas de laboratorios de I+D— experimentaron un desarrollo sin precedentes, dando lugar a sistemas de armas crecientemente sofisticados y cada vez más eficaces en cuanto a su potencia destructora —lo que, según se ha mostrado en el cuadro 2, requirió en ciertos casos, como los referidos al armamento químico y biológico, las minas, los artefactos incendiarios o los láseres cegadores, de acuerdos internacionales para limitar o prohibir su uso y producción, o, como en el armamento nuclear, para impedir su proliferación—. Y la economía de guerra se amplió hacia el tiempo de paz con el desarrollo de un complejo militar-industrial basado en la planificación a largo plazo de la producción y adquisición de nuevos sistemas de armas capaces de dar respuesta a las amenazas percibidas y a los cambiantes desafíos de la estrategia bélica.

2. La disolución de los principios morales de la guerra moderna.

En el curso del casi medio siglo que discurrió con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, dentro del marco establecido por la Guerra Fría, algunos de los principios y valores socialmente aceptados sobre la guerra empezaron a ser discutidos y en buena medida repudiados a la luz de la experiencia vivida. Ese debate surge del hecho de que las grandes guerras del siglo XX fueron guerras totales en las que se implicaron los Estados nacionales, a través de amplias coaliciones, y también las sociedades civiles, dando así lugar a una cierta evanescencia de la frontera entre lo

¹⁴ Véase Ludendorff (1919), págs. 258 a 303.

público y lo privado, entre el ámbito de lo militar y de lo civil, entre los combatientes y los no combatientes. Los objetivos de la guerra no estuvieron, desde entonces, principalmente centrados en el terreno militar, sino que se extendieron sobre las actividades económicas, las infraestructuras, las fábricas y los sistemas de transporte que constituían el fundamento logístico de los ejércitos. La destrucción de esos medios de producción se consideró legítima por su contribución al esfuerzo bélico, al igual que la matanza de civiles —empezando por el bombardeo de Guernica¹⁵ y acabando por los de Hiroshima y Nagasaki— se justificó por estimarse que minar la moral de los enemigos era una necesidad militar.

El arma nuclear, «arma absoluta» de una capacidad destructiva sin precedentes, puso en evidencia la posibilidad de la eliminación de cualquier atisbo de humanidad en el hecho de la guerra. Su desarrollo, como ha destacado Todorov, no fue obra de los Estados totalitarios, sino del «Estado democrático por excelencia, Estados Unidos, (quien la) puso a punto... y decidió inmediatamente utilizarla» debido a un conjunto complejo de razones que tienen que ver con la reivindicación de la primacía en el «reparto del mundo», «la venganza» por la acción japonesa sobre Pearl Harbor —«una afrenta que había que lavar»—, «el racismo antijaponés» y el «efecto del propio impulso que llevó a la fabricación de la bomba», de manera que, «puesto que el proyecto se había iniciado, había que llevarlo hasta el fin»¹⁶. Las consecuencias de esa decisión son claras y terribles: el mal ya no sería, desde entonces, un patrimonio exclusivo de las potencias totalitarias, un resultado de la búsqueda del poder absoluto, sino que podía desprenderse también de la lucha contra ese poder. Y, por ello, aunque «el totalitarismo pueda parecernos... el imperio del mal, de ello no se sigue... que la democracia encarne, siempre y en todas partes, el reino del bien»¹⁷.

Por tal motivo, el armamento nuclear, al igual que otros sistemas de armas de destrucción masiva, ponen en cuestión las ideas y creencias precedentes sobre la guerra. En particular, a partir de ellos, ya no puede aceptarse que el interés del Estado proporcione una justificación para la guerra, pues el poder destructor que se pone en juego hace que, tras su empleo, quede anulada cualquier ventaja; incluso la existencia de la propia humanidad puede verse amenazada si el conflicto nuclear llegara a desarrollarse con toda su potencia. Además, si los civiles no combatientes pasan a ser considerados objetivos legítimos, entonces queda anulado el viejo paradigma establecido por el honor de los guerreros y la guerra se convierte en un crimen sin reglas.

Por otra parte, con la masificación de los ejércitos y la formación de coaliciones estables, el interés del Estado fue minándose progresivamente en tanto que motivación de la guerra. La movilización de millones de hombres en los conflictos requería una justificación ideológica capaz de inducir una elevada moral de combate entre los soldados. Tal justificación, como destacó J. Glenn Gray, permitía «establecer una imagen del enemigo (con la que) diferenciar... radicalmente... el acto de matar con el

¹⁵ Vid. Southworth (1975) y, para una historia oral a partir de los testimonios de los implicados, Thomas y Morgan-Witts (1986).

¹⁶ Cfr. para los entrecomillados de este párrafo, Todorov (2002), págs. 275 a 281.

¹⁷ Cfr. *ibidem*, pág. 284.

de asesinar»¹⁸. De acuerdo con este autor, al desaparecer «las convenciones de la ética militar» y, con ellas, «las restricciones con respecto a la manera de acabar con la voluntad del enemigo..., con ayuda de la propaganda, (se) alcanzó rápidamente una moralidad terriblemente simplificada» y se admitió que «cualquier acto que ayudara... a ganar la guerra era correcto y bueno»; y para ello se precisó «una imagen típica del enemigo... condicionada por la necesidad de odiarle sin límites»¹⁹. De esta manera, el discurso patriótico envolvió las acciones de la Entente durante la Primera Guerra Mundial, en tanto que la lucha contra el mal sirvió para levantar la moral de los ejércitos aliados durante la Segunda, y la afirmación de la democracia frente al totalitarismo representado por el sistema soviético fue el sustrato sobre el que se asentó la hegemonía norteamericana en el seno de la OTAN mientras duró la Guerra Fría. Sin embargo, estas motivaciones ideológicas acabaron por ser rechazadas bajo el influjo de los movimientos pacifistas y de otras organizaciones emergentes de la sociedad civil²⁰, perdiendo su significado en conflictos tan relevantes como los de Vietnam o de Afganistán, lo que condujo, en ambos casos, a la derrota moral y militar de norteamericanos y soviéticos.

Finalmente, aunque tal vez de manera paradójica, el proceso de evanescencia real de las reglas de la guerra, inducido por su sistemático incumplimiento en los conflictos del siglo XX, fue acompañado de un importante desarrollo legislativo internacional para reforzarlas, según se ha mostrado antes en el cuadro 2. Y, en este contexto, renació el debate acerca de la posibilidad de que la guerra misma pudiera ser ilegítima. La discusión acerca de la «justicia» o legitimidad de la guerra viene de antiguo y se suscitó a partir de la contradicción existente entre el legado ideológico de Roma tras la caída del imperio —según el cual la guerra no tiene otra justificación que la conquista del poder— y los principios morales del Cristianismo, primero, y del Islam, después²¹. La aportación seminal al debate fue la de san Agustín de Hipona, quien, en *La ciudad de Dios*, defendió la idea de que «la guerra... es justificada sólo por la injusticia de un agresor», siendo su «objetivo... la paz»²², aunque entendió esta última como la paz de Dios, lo que permitió que su doctrina pudiera interpretarse también como legitimación de las cruzadas inspiradas en la religión. Este dualismo aparecía también en el Corán, pues al mandato de combatir sólo en defensa propia se añadía con insistencia la llamada a una yihad o guerra santa contra los infieles hasta su sumisión o su completa destrucción²³. Sin embargo, Francisco de Vitoria —y, con él, de la escuela de Salamanca en el siglo XVI— vino a negar la legitimidad de cualquier guerra santa y recondujo hacia la propia defensa el argumento de la causa justa para emprender

¹⁸ Cfr. Gray (2004), pág. 153. Para este tema es especialmente interesante el capítulo 5.

¹⁹ Cfr. Gray (2004), pág. 154.

²⁰ Vid. para este y otros aspectos relacionados, Kaldor (2005), capítulo 3.

²¹ Vid. Carr (2002), capítulo 2. En Walzer (2001) y (2004) se analiza extensamente la cuestión de la legitimidad de la guerra, tanto en una perspectiva abstracta como en otra aplicada a conflictos concretos, incluido el terrorismo.

²² *La ciudad de Dios (De civitate Dei)* se escribió entre los años 413 y 426. Las citas se han recogido de Carr (2002), pág. 44.

²³ Un análisis extenso de la dualidad doctrinal del Islam con respecto a la yihad, es el de Elorza (2004a) y (2004b). Vid también para una contextualización del tema en el más general de las relaciones entre la religión y el terrorismo, Elorza, Ballester y Borreguero (2005).

acciones armadas. Y todo ello acabó siendo reformulado, un siglo más tarde, por el filósofo holandés Hugo Grotius en el siguiente enunciado de los criterios de participación en una guerra justa: «que haya una causa justa; que haya la debida autoridad para iniciar la guerra; que haya una intención justa del uso de la fuerza por parte de los bandos en conflicto; que el uso de la fuerza sea proporcionado; que la fuerza sea el último recurso; que se libre la guerra con la meta de la paz; y que haya una esperanza de éxito razonable»²⁴.

Estas ideas teológico-políticas, inspiradoras de un incipiente derecho internacional sobre la guerra, acabaron pronto arrumbadas por el empuje de los modernos Estados y por la primacía de la «razón de Estado». Ésta no fue rechazada de manera formal hasta el Pacto de Kellogg-Briand que, suscrito en 1928 por 62 países, proscribía la guerra como instrumento político y circunscribía su legitimidad a la defensa propia. Las guerras de agresión se definían, así, como un acto ilegal para los Estados; y este principio acabó siendo aplicado, en tanto que responsabilidad penal, también a los individuos promotores de esas guerras a partir de la Carta del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. A partir de ahí, el *ius ad bellum*, las razones legítimas para librar una guerra se sancionaron en la Carta de las Naciones Unidas cuyo artículo segundo ordenó que «en sus relaciones internacionales, los miembros de la organización se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de todo Estado», y cuyo artículo 51 precisó que tal obligación no menoscaba «el derecho inmanente de legítima defensa... en el caso de que un miembro de las Naciones Unidas sea objeto de una agresión armada». Finalmente, el principio de legitimidad de la guerra defensiva o de respuesta a una agresión, se amplió en 1974, por acuerdo de su Asamblea General, al uso de la fuerza aprobado por la propia ONU²⁵.

Sin embargo, todo este esfuerzo ha resultado en cierto modo baldío. Ello, porque durante el último medio siglo han sido múltiples los conflictos en los que algunos Estados, pese a las prohibiciones internacionales, se han embarcado en agresiones más o menos nítidas y, en la práctica, se ha mantenido, como señala Todorov, «el doble rasero según el cual la política interior y la exterior no se rigen por los mismos principios... (pues) en el interior la fuerza está sometida al derecho..., (mientras que) en el exterior la fuerza rige las relaciones entre países y sólo se ve limitada por los contratos que tales países establecen..., pero que pueden romper en cualquier momento»²⁶, pues el derecho internacional carece de capacidad para imponerse mediante el uso de la violencia legítima. Y también porque, con la disgregación del orden mundial tras la caída del Muro de Berlín, ha proliferado un nuevo tipo de conflictos bélicos en los que cristalizan las tendencias disgregadoras de las reglas de la guerra; unas «nuevas guerras»²⁷ fruto de la emergencia política de identidades particularistas —y, por ello, impulsadas por motivaciones ideológicas—, que se han basado en el uso extensivo del terrorismo —y,

²⁴ La formulación original de Grotius aparece en su obra *De iure belli ac pacis* (1625). Aquí se cita la síntesis efectuada por Nabulsi (2003), pág. 235.

²⁵ Vid. Ratner (2003), pág. 45.

²⁶ Cfr. Todorov (2003), pág. 84.

²⁷ Tomo el concepto de Kaldor (2001).

con él, en la negación radical de la distinción entre combatientes y no combatientes, entre los ámbitos de lo militar y lo civil—.

3. «Nuevas guerras»: guerras terroristas.

Siguiendo las propuestas teóricas y analíticas efectuadas por Mary Kaldor, las «nuevas guerras» que irrumpieron con fuerza al diluirse la Guerra Fría —sin que ello impida reconocer sus rasgos en conflictos precedentes, como los del cuerno de África, en Somalia y Etiopía²⁸— son el resultado de una *política de afirmación de identidades* por parte de grupos étnicos o religiosos que se consideran a sí mismos como sujetos de derechos políticos y que reivindican el ejercicio del poder por medio del empleo de la violencia²⁹.

Esa política emerge de la erosión de los Estados nacionales, e incluso de su desaparición. Así, en algunos países en los que el proceso de descolonización de los años cincuenta y sesenta dejó un vacío administrativo y de poder, esos Estados nacieron bajo el signo de la debilidad, de manera que nunca han llegado a consolidarse. En otros, principalmente entre las viejas repúblicas soviéticas con el fin del sistema comunista o entre las yugoslavas con el desmantelamiento del régimen de Tito, el Estado preexistente acabó descomponiéndose antes de dar paso a nuevas estructuras de poder. Incluso este fenómeno se registra también, aunque sin duda de forma atenuada, en algunos países que son miembros de la Unión Europea, en los cuales existen grupos étnico-nacionalistas que reivindican, por medios armados, un poder territorialmente acotado, como es el caso del nacionalismo vasco en España o del nacionalismo irlandés en el Reino Unido. Los Estados débiles, como ha destacado Loretta Napoleoni, pueden ser un «vivero del terrorismo», pues su fracaso deja un vacío que «los grupos armados vienen a llenar»³⁰. Dentro de ellos, suelen aparecer redes delincuenciales que resultan favorecidas por la irrupción de la economía paralela o informal. Las organizaciones criminales, los entramados de corrupción, el mercado negro y los tráficó ilícitos de drogas y armas son fenómenos que proliferan cuando la autoridad estatal se desvanece. Y dentro de esa economía paralela aparecen hombres de negocios que emplean a un gran número de personas, ocupándolas en actividades delictivas, y, eventualmente, acaban formando verdaderos ejércitos particulares de hombres armados, pudiéndose afirmar así como «señores de la guerra» que ejercen un liderazgo identitario.

Los grupos identitarios buscan con frecuencia una afirmación de su poder mediante la violencia, desarrollando una actividad bélica más o menos intensa que, en su expresión más compleja, llega a adoptar la forma de lo que Mary Kaldor llama

²⁸ Recuérdese que, después de su independencia en 1960, Somalia ha sufrido continuas situaciones conflictivas internas, principalmente tras el establecimiento de un régimen de partido único con la Constitución de 1979. Y, en el caso de Etiopía, se puede decir otro tanto tras la abolición de la monarquía en 1977. Además, ambos países estuvieron entablaron una guerra entre 1978 y 1982; y Etiopía tuvo que hacer frente al conflicto secesionista de Eritrea desde 1962 hasta la independencia de este territorio en 1993. Para una revisión de los conflictos armados en el continente africano, véase Scholl –Latour (2001).

²⁹ Sobre la cuestión de las identidades y su conversión en el fundamento de la violencia, véase el ensayo de Maalouf (1999). Por otra parte, el riesgo de la «deriva identitaria» para la democracia se destaca en el epílogo de Todorov (2002).

³⁰ Cfr. Napoleoni (2004), págs. 243 y 247.

«guerra en red»³¹, pues en ella participa un entramado de actores estatales y no estatales que interactúan entre sí, como es el caso de las bandas paramilitares dirigidas por líderes carismáticos, los señores de la guerra asentados sobre un territorio limitado, las células terroristas, los voluntarios internacionales fanatizados, las organizaciones criminales dedicadas a tráfico ilícito, los ejércitos regulares y los grupos de mercenarios. Esa guerra se desenvuelve fuera del canon establecido para la guerra moderna: su raíz es tan esencialmente ideológica que no invoca un interés de Estado, no se somete a las reglas que ordenan las convenciones internacionales y el objetivo de sus ataques es la población civil.

Las principales características de esta nueva modalidad bélica, las ha sintetizado Kaldor (2003) señalando lo siguiente:

- Son guerras que reúnen, junto a los actores nacionales involucrados, a participantes foráneos que se extienden desde los mercenarios, voluntarios extranjeros o simpatizantes de la diáspora que participan como combatientes, hasta las organizaciones humanitarias de ayuda o las ONG's internacionales.
- Su escenario territorial tiene una delimitación difusa y con frecuencia cambiante en cuanto a sus líneas de demarcación. En muchas ocasiones son guerras transfronterizas que involucran a personas que emigraron del país implicado.
- Esta fluidez territorial está condicionada, en buena medida, por el hecho de que el conflicto se desenvuelve en zonas en las que se produce una descomposición del poder estatal; zonas con Estados frágiles o fallidos, reconocidos internacionalmente, pero incapaces de controlar el territorio al haberse socavado en ellos el monopolio en el uso de la violencia legítima.
- Se trata, además, de «guerras asimétricas», pues debido a que en ellas intervienen actores con muy diferente capacidad y poder —como pueden ser las bandas terroristas y los ejércitos regulares—, no existe equiparación o equilibrio de fuerzas entre ellos³².
- Esa asimetría se relaciona con el hecho de que se trata, por lo general, de «guerras de baja intensidad»³³, de guerras de desgaste en las que se busca la prolongación del conflicto el mayor tiempo posible, aunque para ello, siguiendo la táctica propugnada por Mao Tse-tung³⁴, se produzcan retiradas estratégicas. Por tanto, en cuanto a su concepción, la guerra terrorista se sitúa en el polo opuesto al propugnado por la concepción moderna que encarna Clausewitz, de

³¹ Vid. Kaldor (2001) y, para una síntesis, Kaldor (2003), así como Münkler (2002), págs. 33 a 43.

³² Según destaca Münkler (2002), pág. 11.

³³ Cfr. Münkler (2002), pág. 26.

³⁴ Se alude aquí a la idea propugnada por Mao en *Sobre la guerra prolongada*, obra escrita en 1938 bajo la circunstancia de la invasión japonesa de China, según la cual «el objetivo de la guerra no es otro que conservar las fuerzas propias y destruir las enemigas». Vid. para más detalles, Münkler (2002). La influencia del maoísmo sobre las organizaciones terroristas de izquierda ha sido destacada por Laqueur (2003), capítulo 5.

acuerdo con el cual la conducción de la guerra debe confluir hacia una batalla principal o decisiva en la que se produzca «la aniquilación de la fuerza enemiga»³⁵. Y, de esta manera, el conflicto se desenvuelve con intensidad variable tanto para ocasionar unos mayores costes al oponente —pues el sostenimiento de las fuerzas regulares y los cuerpos de seguridad requiere unos recursos superiores a los que emplean las organizaciones terroristas y los grupos paramilitares³⁶—, como para aprovechar el componente publicitario del terrorismo con fines de propaganda³⁷.

- Dada la variedad de actores que se reúnen en las redes de combatientes, juega un papel esencial el discurso que los aglutina. La guerra tiene, para sus promotores, una motivación exclusivamente ideológica establecida a partir de la defensa de una identidad étnica o religiosa.

- El objetivo de la guerra es la movilización política. La violencia se orienta a la expansión de la propia red extremista mediante la adhesión de la población involucrada. En concordancia con tal objetivo, la táctica básica de combate utilizada es el terrorismo. Por ello, esa adhesión no nace del convencimiento sino del miedo que se extiende entre todos los habitantes cuando se eliminan los adversarios políticos que pueden obstaculizar el control de la sociedad. En definitiva, se recurre «a la violencia... para hacer imposible la política pacífica y... (se) ponen como objetivos a los civiles desarmados... (para) castigarlos por su afiliación o por su origen étnico»³⁸. De ahí que en estas guerras se violen sistemáticamente los derechos humanos, en especial por medio del desarrollo de acciones de limpieza étnica y de genocidio entre la población civil. No sorprende, entonces, que la gran mayoría de las bajas en estos conflictos se produzcan entre los no combatientes.

- Y, finalmente, la guerra, si es exitosa para quienes la promueven, conduce a la construcción de nuevas entidades estatales que, en muchos casos, no han pasado de ser un «Estado embrión», según la denominación de Napoleoni³⁹. Es decir, un Estado que cuenta con «el monopolio de los medios de violencia, el territorio, un sistema de impuestos y una burocracia pública», pero que carece de «soberanía, constitución, imperio de la ley..., legitimidad de la autoridad y ciudadanía»; y que, en consecuencia, gravita en torno a la guerra, pues es «una estructura con la que mantener viva la lucha»⁴⁰.

Las «nuevas guerras» son, en síntesis, guerras terroristas que, con independencia de la profundidad que hayan alcanzado, pueden ser catalogadas dentro de una misma

³⁵ Cfr. Clausewitz (1832), pág. 233. Sobre la batalla principal, vid. los capítulos 9 a 12 del libro cuarto de esta obra.

³⁶ Vid. Münkler (2002), pág. 55.

³⁷ Vid. Münkler (2002), pág. 175. Sobre este punto, vid. también la interesante reflexión de Ignatieff (2004).

³⁸ Cfr. Ignatieff (2005), pág. 149.

³⁹ Vid. Napoleoni (2004), capítulo 5.

⁴⁰ Cfr. Napoleoni (2004), pág. 132.

entidad conceptual. Estas guerras, como se verá a continuación, han dado lugar a un singular modelo de economía bélica cuyos elementos sustantivos deben ser puestos de relieve para que pueda disponerse de las nociones requeridas al abordar el análisis de las consecuencias económicas del terrorismo.

4. La economía depredadora de guerra.

El modelo de economía depredadora de guerra subvierte los principios de la economía de movilización a los que anteriormente se ha hecho referencia, de la misma manera que la guerra terrorista subvierte las convenciones de la guerra moderna. Así, mientras que en ésta la economía se organiza para desplegar, dentro del territorio, toda la potencialidad de la nación en orden a la obtención del armamento y pertrechos que requieren los ejércitos en lucha —lo que implica una reorientación de las actividades productoras de bienes y servicios hacia esa finalidad—, en la guerra terrorista la economía se configura como un procedimiento de expolio o rapiña de los recursos existentes en el territorio bajo control de las organizaciones que la sostienen —lo que supone la destrucción de la base productiva nacional—.

Ya se ha señalado que el objetivo de la guerra terrorista es la movilización política, de manera que el control del territorio se logra a través del miedo y no por medio de la adhesión ideológica de la mayor parte de la población. Ello incluye el desplazamiento o expulsión de quienes se oponen a las organizaciones terroristas, así como su eliminación por medio del asesinato, pudiéndose llegar a extensas operaciones de limpieza étnica. Asimismo, para facilitar la supresión de la oposición, no existe inconveniente en propiciar la destrucción de las infraestructuras o del capital productivo privado, ni en realizar ataques sistemáticos a objetivos civiles para crear un clima de inseguridad, ni en emplear técnicas de guerra psicológica contra la población resistente, ni en desencadenar hambrunas, ni en estimular las violaciones y abusos sexuales sistemáticos. Sin embargo, ello no obsta para que esas organizaciones cultiven a su población de referencia —es decir, al grupo «en pretendido beneficio del cual declaran llevar a cabo campañas de violencia»⁴¹ y del que obtienen apoyo político y militantes con los que renovar su capital humano— mediante la creación de asociaciones y entidades de apoyo social y económico que canalizan recursos con los que asistir a las familias de los activistas, desarrollar determinados servicios sociales o proporcionar empleos⁴², siempre sujeto todo ello a la inestabilidad que se deriva de la irregularidad que caracteriza a la obtención de ingresos.

En estas condiciones, el territorio deja de ser una sólida base sobre la que pueda asentarse un esfuerzo económico orientado hacia la guerra. Todo lo contrario, con la destrucción del capital y las infraestructuras, así como con la inseguridad a la que se somete a la población por medio del terrorismo, lo que se logra es rebajar e incluso paralizar la actividad económica y, por tanto, la posibilidad de que la producción se organice para sostener la guerra. Y, en consecuencia, han de habilitarse otras formas de obtener los recursos materiales y financieros que se necesitan para sostener el esfuerzo bélico, lo que da lugar a una economía depredadora de guerra cuyos principales

⁴¹ Cfr. Reinares (1998), pág. 85.

⁴² Vid. para el detalle en los casos de Oriente Medio y Colombia, Napoleoni (2004), capítulo, 5.

elementos constitutivos son los que se reflejan en el gráfico 1 y se enumeran a continuación⁴³:

- En primer lugar, por medio del saqueo y la extorsión se transfieren recursos desde la población civil hacia las organizaciones combatientes. A los ricos se les extorsiona bajo amenazas o se les mata para robarles; se transfieren propiedades privadas una vez realizadas las operaciones de limpieza étnica; se proporciona «protección» a personas y organizaciones; y se establecen «impuestos de guerra» para autorizar la ayuda humanitaria. Asimismo, algunas organizaciones terroristas cuentan con redes de delincuentes especializados en el robo, el fraude con tarjetas de crédito o los atracos.
- En segundo término, se organiza también la transferencia de recursos hacia esas organizaciones a través del mercado negro. Los actores implicados en la actividad bélica y la población civil establecen transacciones por medio de ese mercado desde posiciones desiguales, de manera que esta última resulta perjudicada. Así, las acciones de la guerra terrorista pueden conducir a situaciones de desabastecimiento que son suplidas por medio del acceso a un mercado negro controlado por las fuerzas combatientes, en el que se opera a precios anormalmente elevados o se realizan trueques de bienes duraderos, como vehículos o electrodomésticos, a cambio de artículos de primera necesidad, como alimentos. Todo ello, en detrimento de la población civil.
- En tercer lugar, las organizaciones terroristas participan directa o indirectamente en la realización de tráfico ilícitos. Son frecuentes los casos en los que estas organizaciones se implican en el comercio de estupefacientes o extraen de éste una exacción en concepto de pago por los servicios de protección que proporcionan a los narcotraficantes⁴⁴. Igual ocurre con el contrabando de bienes de consumo o los tráfico de armamento, diamantes⁴⁵ o materias primas sujetas a embargo. A ello debe añadirse la constitución de empresas que realizan negocios aparentemente legales, pero que se implican en operaciones de blanqueo de los capitales obtenidos por medios delictivos, o de entidades sin fines de lucro destinadas a recaudar aportaciones voluntarias de simpatizantes o a obtener ayudas gubernamentales, tanto locales como internacionales⁴⁶.
- Y, finalmente, existe un importante flujo de transferencias a las organizaciones armadas desde el exterior, de manera que se complementan los recursos obtenidos a partir de las actividades depredadoras internas antes aludidas. Así, las remesas de los trabajadores emigrados al extranjero complementan los recursos familiares de los que dispone la población civil y que

⁴³ Vid. Kaldor (2001), págs. 132 a 142, y Münkler (2002), págs. 131 a 174.

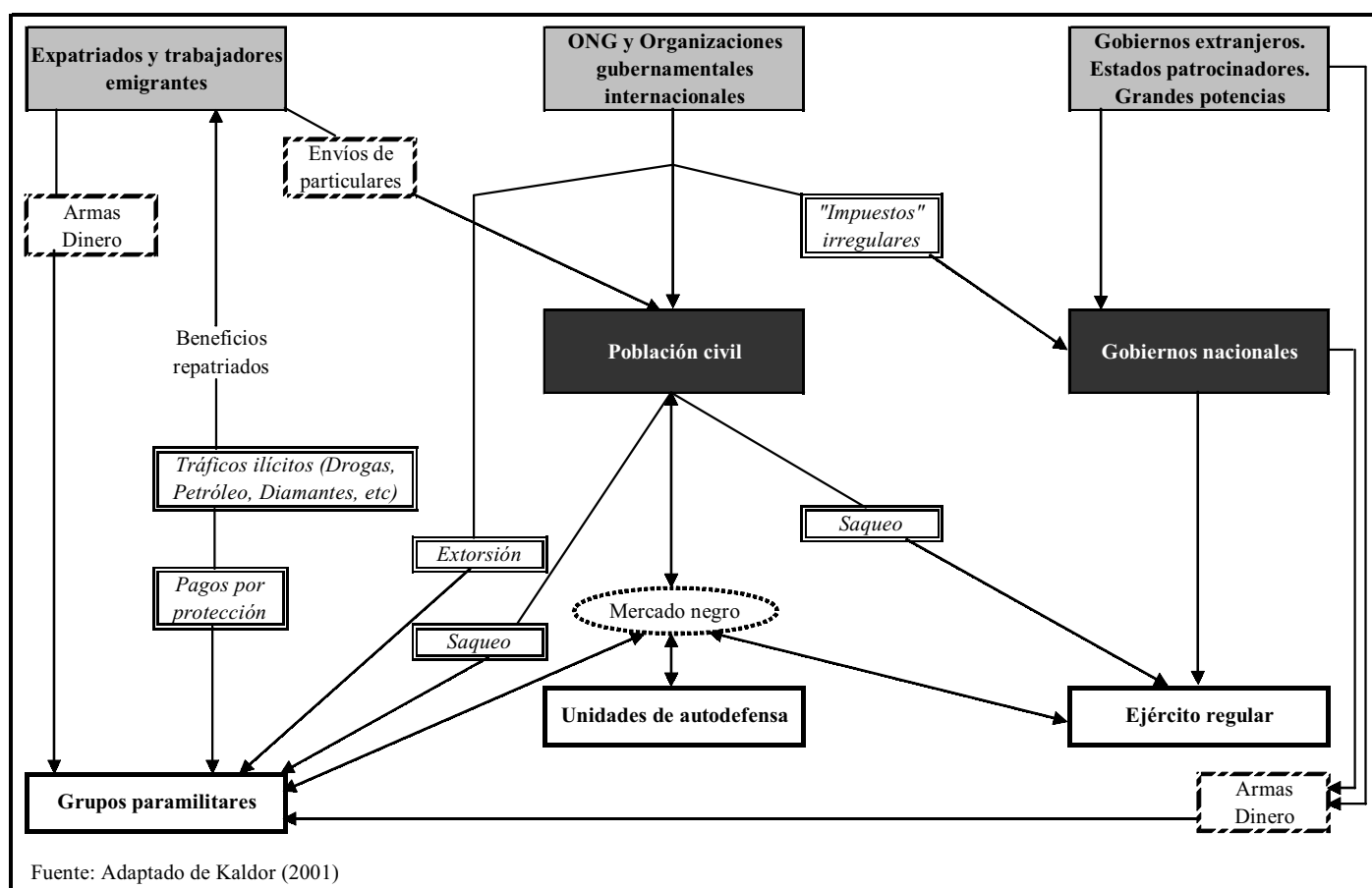
⁴⁴ Vid. un examen especialmente centrado en las organizaciones terroristas islámicas, Napoleoni (2004), capítulos, 3 y 7. En cuanto al caso del terrorismo colombiano, vid. Villamarín (2005). Igualmente tiene interés el trabajo de Thamm (2001).

⁴⁵ Sobre el mercado de diamantes, con observaciones interesantes sobre su relación con la financiación de organizaciones terroristas, vid. Cockburn (2002).

⁴⁶ En Napoleoni (2004), capítulos 10 y 14 se exponen múltiples ejemplos de este tipo de actividades.

se canalizan a los actores combatientes a través de la extorsión y el mercado negro. Esos mismos trabajadores suelen contribuir a la recaudación en sus países de acogida de fondos destinados al sostenimiento de los grupos armados cuyo origen está en su misma etnia o confesión religiosa. Además, aunque la financiación del terrorismo por parte de los gobiernos extranjeros decayó con el fanal de la Guerra Fría⁴⁷, no es infrecuente que subsistan ayudas a determinados grupos contendientes o a los gobiernos de los países en los que se sitúa el escenario de la guerra terrorista. Y se anotan también los recursos que canalizan las ONG's internacionales bajo la forma de ayuda humanitaria, parte de la cual se desvía muy frecuentemente hacia las organizaciones combatientes por medio del robo, el pago de impuestos irregulares o la extorsión.

Gráfico 1: La economía depredadora de guerra: actores, actividades y flujos



En resumen, la economía de la guerra terrorista no se organiza para favorecer la generación interna de los recursos financieros y materiales necesarios para el sostenimiento del esfuerzo bélico, sino que propicia la obtención de esos recursos a partir de la destrucción de la base económica interna por medio de su depredación. Este proceso depredador puede ser más o menos intenso, y puede alcanzar una mayor o menor extensión territorial, dependiendo de la profundidad que alcancen el conflicto en el que tiene lugar.

⁴⁷ Vid. Napoleoni (2005), capítulos 2 y 3.

5. Las consecuencias económicas y sociales de la guerra terrorista.

Los efectos económicos y sociales de las guerras terroristas son, por lo general, intensos y persistentes cuando los conflictos alcanzan una cierta profundidad, lo que no excluye la posibilidad de que se concreten en meras perturbaciones transitorias cuando sólo se producen atentados aislados sin continuidad temporal. Esos efectos se derivan primariamente de las destrucciones a las que da lugar la guerra, aunque se extienden mucho más allá del valor de éstas debido a que el terrorismo rebaja las expectativas de los empresarios y consumidores induciendo un ciclo depresivo en la economía correspondiente.

Desde la perspectiva económica, la principal consecuencia de los conflictos armados es la reducción del potencial de crecimiento y, con él, la caída del nivel de vida de la población afectada. Los estudios que se han realizado sobre determinados casos concretos⁴⁸ o los que han tenido en cuenta conjuntamente una multiplicidad de guerras terroristas⁴⁹, son unánimes al señalar que éstas socavan la actividad productiva y conducen a una caída en las tasas de incremento del PIB de los países implicados, cuando no a la reducción de esta variable macroeconómica. El ciclo económico típico, del que se hace una representación en el gráfico 2, se refleja en una disminución de la producción ya en el período anterior al conflicto armado, pues las tensiones políticas tienen un impacto negativo sobre ella; esa recesión se acentúa notablemente durante el conflicto, de forma que puede alcanzar una gran intensidad; y, una vez finalizada la guerra, persiste durante un cierto tiempo para dar paso después a una recuperación en la senda del crecimiento del PIB. El saldo final de todo ello no es sino un deterioro del nivel de vida de acuerdo con la aproximación que a este concepto proporciona la cifra del PIB por habitante.

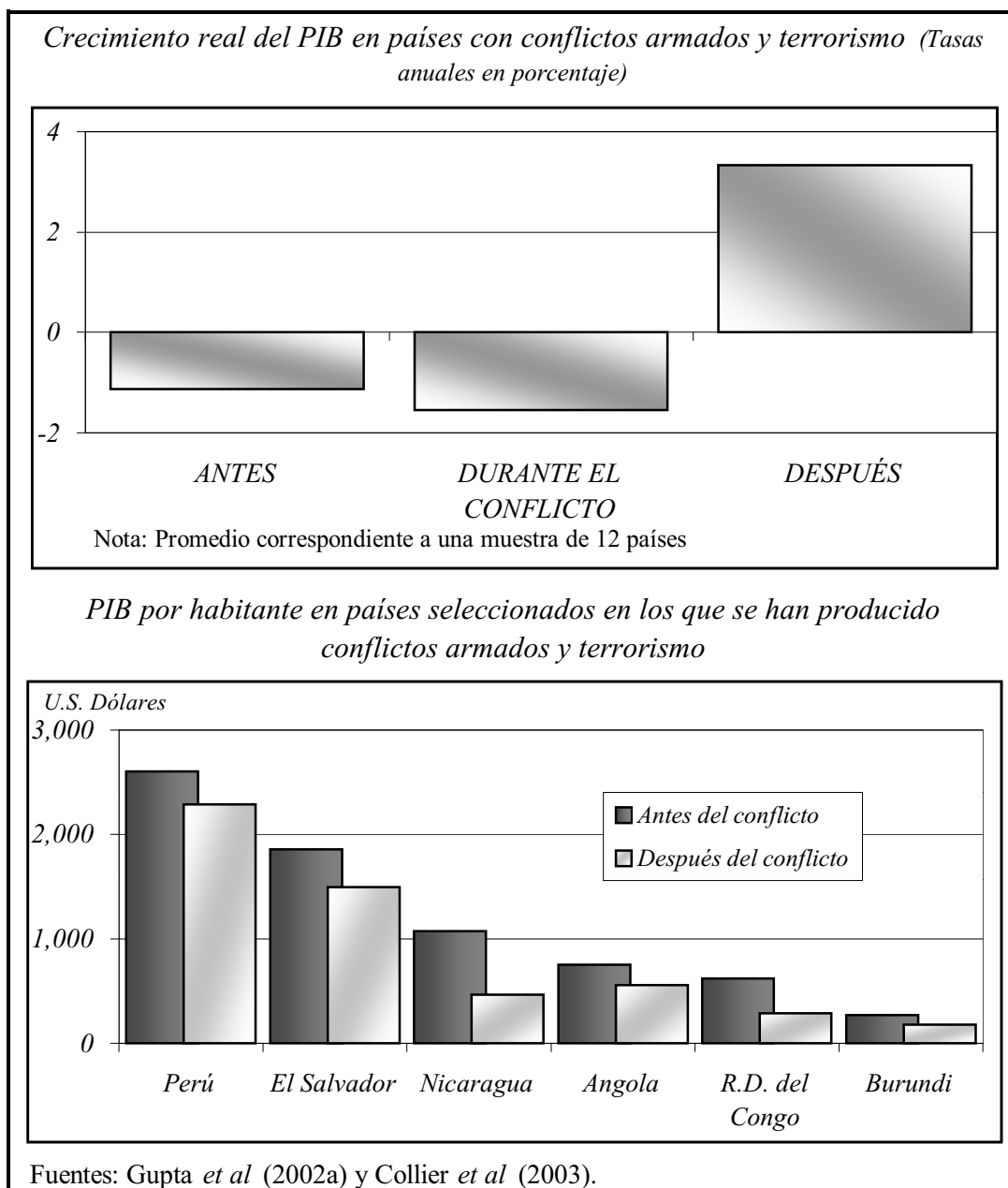
Este resultado global se gesta a partir de la negativa incidencia que la inestabilidad vinculada al terrorismo tiene sobre las expectativas de los consumidores y los inversores. Aquellos, en un marco de incertidumbre creciente, reducen su gasto y aplazan sus adquisiciones de bienes duraderos por motivos de precaución. Y éstos, al rebajarse las previsiones de demanda, hacen caer sus programas de inversión, transfieren al exterior sus recursos y, eventualmente, abandonan el mercado. A ello se añaden también los efectos negativos que se derivan de las destrucciones que experimenta el capital físico —bien se trate de infraestructuras, bien de instalaciones productivas— y de la menor afluencia de inversiones extranjeras. Y estos fenómenos inducen un descenso de la demanda que acaba reflejándose en el desplome del crecimiento económico. Los efectos acumulados a lo largo de un conflicto armado típico pueden llegar a suponer unas pérdidas de hasta el 60 por 100 en el PIB anual⁵⁰.

⁴⁸ Véanse, sobre Guinea, Velarde (1987); sobre el País Vasco, Abadie y Gardeazábal (2003) y Myro *et al.* (2004); y sobre Estados Unidos con ocasión del 11-S, US-GAO (2002a), Lenain *et al.* (2002) y OCDE (2002).

⁴⁹ Vid. Stewart, Huang y Wang (2001), donde se analizan 18 casos de conflictos; Gupta *et al.* (2002a) y (2002b), que se basan en el estudio de 22 guerras terroristas en 20 países; y, para un panorama, Collier *et al.* (2003).

⁵⁰ Vid. Collier *et al.* (2003), pág. 21. En el capítulo 1 de este trabajo se explican con detalle los mecanismos económicos que conducen a generar ciclos depresivos en los casos de guerra terrorista.

Gráfico 2: Consecuencias de la guerra terrorista en el crecimiento y el bienestar



Por otra parte, se constata también que las guerras terroristas trastocan seriamente el funcionamiento del sector público en los Estado afectados. Por una parte, los ingresos estatales, al deteriorarse las rentas, experimentan una apreciable reducción —que, en los casos analizados por Gupta *et al.* (2002a), se concreta en una caída desde el 25 al 20 por 100 del PIB entre el período anterior al conflicto y el período en el que éste tiene lugar—; por otra, el gasto público se incrementa de forma notable —lo que, en esos mismos casos, se refleja en un aumento desde el 31 hasta el 35 por 100 del PIB—; y, en tercer lugar, ese gasto se reorienta hacia las fuerzas armadas, dejando desatendidas las funciones sociales, especialmente la sanidad y la educación. Las consecuencias son fáciles de ver: el déficit público se incrementa de manera extraordinaria hasta límites difícilmente sostenibles —de forma que, en los casos aludidos, avanza desde un nivel del 6 por 100 del PIB hasta otro del 15 por 100—, lo

cual resta capacidad a la economía para su crecimiento; y, además, el incremento del gasto militar y la caída del gasto educativo tienen también efectos perversos sobre el potencial de desarrollo⁵¹.

La cuestión del gasto en defensa y seguridad merece un cierto detenimiento. Con motivo de la progresión que, en los años noventa, experimentó el terrorismo y, sobre todo, a raíz de su extensión hacia los países más desarrollados, se asistió en éstos, a partir de 1998, a un crecimiento apreciable de los gastos militares, así como de los destinados a reforzar de las fuerzas policiales. Tal tendencia se ha visto acentuada en los años más recientes, especialmente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, de manera que se ha podido afirmar que la era del «dividendo de la paz» —en alusión al período ulterior a la caída del Muro de Berlín, en el que se redujo con intensidad el referido gasto— ha terminado. Pues bien, este desvío de recursos hacia la lucha contraterrorista puede tener un impacto negativo sobre el crecimiento económico a largo plazo, pues se asocia a él una menor acumulación de capital y una proporción más reducida de empleos civiles cuya productividad es más alta que la de los militares. Los estudios econométricos sobre este tema no son, sin embargo, del todo concluyentes, aunque el balance que se puede establecer a partir de ellos se inclina hacia la opinión de que dicho efecto es real, si bien tiene lugar de una manera más bien atenuada⁵². Así, uno de los trabajos más recientes de los que se dispone⁵³ señala que un aumento de los gastos militares equivalente a un 1 por 100 del PIB reduce el potencial de crecimiento económico en un 0,25 por 100.

Además del gasto público en defensa y seguridad, también se registra un incremento de los gastos privados en esta materia para prevenir el terrorismo, lo que se concreta en la contratación de personal especializado y en la realización de inversiones destinadas a facilitar la vigilancia, establecer alarmas o proteger los sistemas informáticos. Tales gastos, aunque mejoran el bienestar personal, se concretan en actividades cuya productividad es más bien baja y, en algunos casos —como en los aeropuertos y estaciones, o en el acceso a edificios y oficinas— ocasionan pérdidas de tiempo que también reducen la productividad del trabajo. Con todo, se trata de un efecto débil, de manera que se estima que la duplicación de tales gastos sólo reduce el nivel potencial del PIB en un 0,6 por 100 al cabo de seis años⁵⁴.

En conjunto, el incremento del gasto público y privado para aumentar la seguridad interior y combatir el terrorismo supone una desviación de recursos hacia actividades de baja productividad y, con ello, una rebaja en la capacidad potencial de desarrollo de la economía. La OCDE ha estimado con un modelo de simulación en el que se toma como base la economía norteamericana, que con un incremento del 1 por 100 del PIB en el gasto militar, financiado con la emisión de deuda pública, un aumento del empleo público equivalente al 0,5 por 100 de la población activa y una alza en el

⁵¹ Los modelos econométricos estimados por Gupta *et al.* (2002a), págs. 12 a 18, aportan una verificación empírica a estos efectos perversos del comportamiento del sector público y señalan también el impacto negativo global de la guerra terrorista sobre el nivel de PIB por habitante de los países en conflicto.

⁵² Vid. OCDE (2002), pág. 168 y Lenain *et al.* (2002), págs. 30 y 31.

⁵³ Vid. Smith y Dunne (2001).

⁵⁴ Vid. OCDE (2002), pág. 168.

gasto privado de seguridad del 0,5 por 100 del PIB, escalonados a lo largo de tres años, se producen los siguientes efectos: a corto plazo, el ensanchamiento de la demanda estimula una subida de la producción, de manera que, durante esos tres ejercicios, el PIB crece por encima del nivel de referencia; pero al cabo de ese tiempo, la elevación de los tipos de interés en más de 30 puntos básicos, inducida por el endeudamiento público, frena la acumulación de capital; además, la productividad del trabajo se ve cercenada en un 0,5 por 100 y el tipo de cambio real se incrementa en torno al 3 por 100; y, en consecuencia, la producción descende, de modo que al quinto año se registra ya una caída del 0,7 por 100 en el PIB con respecto a su nivel de referencia⁵⁵. En definitiva, aunque con unos efectos no demasiado llamativos, parece evidente que las actividades contrterroristas se traducen en una rebaja del potencial de desarrollo económico, lo que no obsta para que, por otra parte, mejoren la percepción subjetiva de bienestar de los ciudadanos y se evite así el impacto negativo que, sobre la economía, siempre tiene el aumento de la incertidumbre.

Por otro lado, más allá de estos efectos de naturaleza macroeconómica, también se han analizado otros que se circunscriben a determinados sectores de la economía. Así, con ocasión de los ataques del 11-S en Estados Unidos, se ha analizado el impacto del terrorismo sobre el sector asegurador, destacándose que el aumento de la siniestralidad conduce a un incremento de las primas cobradas por los bienes asegurados, así como, en ciertos casos, al rechazo de la cobertura del riesgo correspondiente. El primero de esos efectos tiene una mayor incidencia sobre algunas industrias, como la del transporte —singularmente el aéreo—, la construcción, la energía o la turística, estimándose que dichos atentados condujeron a un aumento del orden del 30 por 100 en las primas por responsabilidad civil o por pérdidas en los bienes comercializables⁵⁶. Y el segundo se produce con mucha frecuencia, pues son pocos los países en los que se han establecido instituciones capaces de solventar ese problema de exclusión del mercado⁵⁷. Otro sector para el que, con respecto a los países mediterráneos, se han destacado los negativos efectos del terrorismo, es el del turismo; un sector sensible al impacto que los atentados tienen sobre unos demandantes que pueden cambiar de destino fácilmente⁵⁸. Y, finalmente, aludiendo a los casos de España y Grecia, se ha destacado que, entre 1975 y 1995, el terrorismo ha causado una reducción de los flujos de inversión extranjera directa recibidos por esos países, de manera que, en el primero, se ha perdido una cifra equivalente al 7,6 por 100 de la Formación Bruta de Capital Fijo y, en el segundo, otra que se eleva hasta el 34,8 por 100 de dicha variable macroeconómica⁵⁹.

⁵⁵ Vid. OCDE (2002), págs. 168 y 169.

⁵⁶ Vid. Hillman, (2002).

⁵⁷ Entre ellos, se destacan los casos de España —donde el *Consorcio de Compensación de Seguros*, creado en 1928, se hace cargo de los riesgos por terrorismo desde el comienzo de los años setenta—, el Reino Unido —donde, desde 1993, existe un mecanismo de reaseguros, el *Pool Re*, establecido con ocasión del recrudecimiento de los ataques del IRA—, África del Sur —donde, desde 1979, la *South African Special Insurance Association* asegura los riesgos políticos—, Israel —donde existe un fondo financiado por un impuesto sobre bienes inmobiliarios para cubrir los daños por terrorismo—, y Francia —país en el que, con ocasión del 11-S, la *Caisse Centrale de Réassurance* empezó a hacerse cargo de estos riesgos—. Vid. OCDE (2002).

⁵⁸ Vid. Dragos y Kutan (2001).

⁵⁹ Vid. Enders y Sandler (1996).

Los estudios sobre las consecuencias económicas del terrorismo han destacado también que, en el caso de conflictos intensos y continuados, se produce también un encarecimiento de los bienes y servicios, al desencadenarse procesos inflacionistas muy intensos. Así, Gupta *et al* (2002a), partiendo del análisis de nueve casos de guerras terroristas, evalúan la tasa anual de crecimiento de los precios al consumo durante el conflicto en más del 300 por 100, un nivel que sextuplica el observado en los años anteriores a la conflagración. La hiperinflación es un resultado asociado a la actividad depredadora de las organizaciones terroristas, a la destrucción de la base productiva nacional y a la extensión del mercado negro. Y sus efectos son devastadores para la economía —pues inutiliza el papel de la moneda como medio de intercambio, haciendo crecer el trueque como forma de relación de mercado— y para la población —pues hace ineludible el empobrecimiento de la mayoría de los habitantes—.

La caída de la actividad económica, las destrucciones a las que conduce la guerra y el empobrecimiento general se encuentran en la base de las principales consecuencias sociales que se han observado en los países que se han visto envueltos en los conflictos de naturaleza terrorista. Entre ellas merece destacarse, en primer lugar, el traslado de importantes segmentos de la población, lo que da origen al fenómeno de los refugiados y de los desplazados. Ello se deriva del hecho de que, al hacerse la guerra contra la población civil, ésta trata de huir de la contienda; y lo hace masivamente. Un informe de Oxfam destaca que, durante el decenio de 1990, el 90 por 100 de las víctimas en los conflictos armados han sido civiles⁶⁰. Y, a su vez, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados destaca que, si al mediar la década de los setenta se contabilizaban 2,5 millones de personas refugiadas o desplazadas, veinte años más tarde esta cifra se había multiplicado por siete, llegando a los 18 millones de individuos. Al comenzar el siglo actual, esta organización internacional evaluaba en 12 millones el número de refugiados y en 5,3 el de desplazados internamente⁶¹, siendo los principales países afectados los que se reflejan en el cuadro 3.

Otra de las consecuencias sociales derivadas de la guerra terrorista es el deterioro de las condiciones de vida de la población civil, lo que afecta a su alimentación y a su salud. Así, tomando como ejemplo el caso de Palestina con posterioridad al desencadenamiento de la Intifada de Al Aqsa en 2000 —uno de cuyos rasgos esenciales ha sido la utilización del terrorismo contra Israel—, de acuerdo con los datos difundidos por la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, se aprecia que, dos años más tarde: la mitad de los palestinos necesitan recibir ayuda alimentaria —siendo 500.000 los beneficiarios del Programa Mundial de Alimentos de la FAO, y un millón los acogidos bajo la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos—; más del 60 por 100 de las familias se encuentran desabastecidas de proteínas animales o de frutas y legumbres; la malnutrición afecta al 22,5 por 100 de los niños y la anemia a otro 19,7 por 100; esta enfermedad está también extendida entre el 10,8 por 100 de las mujeres en edad fértil⁶². Pero más allá de este caso concreto, los estudios que han tomado en consideración una multiplicidad de

⁶⁰ Vid. Cairns (1997).

⁶¹ Para más detalle, vid. Collier *et al* (2003), págs. 17 y ss.

⁶² Los datos se han extraído del reportaje publicado por De la Guardia (2002).

países con conflictos, señalan una reducción importante de la esperanza de vida —con una caída del 0,5 por 100 cada año de guerra⁶³—, un aumento de la mortalidad infantil —que se incrementa, en un conflicto típico de cinco años de duración, en un 13 por 100 por encima del nivel de base, permaneciendo un 11 por 100 más arriba de este nivel durante el quinquenio de posguerra⁶⁴— y un incremento acusado de la morbilidad ocasionada por enfermedades infecciosas —entre las que se destacan el sarampión, la malaria, las diarreas, las afecciones respiratorias y el sida—.

*Cuadro 3: Principales países de origen de los refugiados y desplazados internamente.
(Miles de personas en 2002)*

<i>País</i>	<i>Período</i>	<i>Nº de refugiados</i>	<i>Nº de desplazados internamente</i>
Afganistán	1978–2002	3.800	1.200
Burundi	1991 (En curso)	550	—
Irak	1985–1992	530	—
Sudán	1983 (En curso)	490	—
Angola	1992–2002	470	202
Somalia	1988–1992	440	—
Bosnia–Herzegovina	1992–1995	430	438
República Democrática del Congo	1997–1999	390	—
Eritrea	1998–2001	330	—
Colombia	1984 (En curso)	—	720
Sri Lanka	1983–2002	—	683
Azerbaiyán	1992 (En curso)	—	573
Rusia	1999 (En curso)	—	443
Georgia	1991 (En curso)	—	264
Servia y Montenegro	1991–1999	—	263
Liberia	1992–1996	—	196

Fuente: UNHCR.

Finalmente, el terrorismo causa severos daños psicológicos entre los que sobreviven a la guerra⁶⁵. Aunque no se dispone de muchos estudios al respecto, sí se puede indicar que la prevalencia de las enfermedades psicológicas entre quienes han sido víctimas del terror es muy elevada⁶⁶. Así, en Bosnia–Herzegovina, las investigaciones epidemiológicas llevadas a cabo entre los refugiados señalan que la depresión afecta a una proporción que se sitúa entre el 14 y el 21 por 100; y el trastorno de estrés postraumático (TETP) se manifiesta entre el 18 y el 53 por 100 de los casos analizados. Por su parte, entre los refugiados camboyanos, los síntomas de depresión aparecen en un 68 por 100 de los individuos y el TEPT en el 37 por 100. En España, entre las víctimas del terrorismo de ETA, se estima una prevalencia de trastornos psiquiátricos del 45 por 100 entre quienes ha sufrido directamente atentados, y del 23 por 100 entre sus familiares⁶⁷; y la probabilidad de sufrir el TEPT se ha estimado en el

⁶³ Vid. Gupta *et al* (2002a), pág. 12.

⁶⁴ La estimación es de Hoeffler y Reynal –Querol (2003). En Collier *et al* (2003), págs. 23 y ss puede ampliarse, con abundantes datos, este punto.

⁶⁵ Por daño psicológico se entiende el conjunto de lesiones psíquicas que se derivan de las reacciones individuales a los sucesos que ponen en peligro la integridad física o moral de las personas, así como las secuelas emocionales que persisten a dichas lesiones y menoscaban la salud mental de quien lo padece. Vid. para estos conceptos y su relación con el terrorismo, Echeburúa (2004), capítulo 1.

⁶⁶ Vid. Collier *et al* (2003), págs. 29 y ss.

⁶⁷ Cfr. Baca *et al* (2003), págs. 174 y 175.

50 por 100, situándose en línea con otros delitos violentos⁶⁸. Y, también en España, con respecto al atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid, se ha estimado que en el período inmediatamente posterior al suceso traumático, entre las víctimas y sus familiares, se contabilizaba un 31,3 por 100 con síntomas de depresión y otro 28,2 por 100 con TEPT; esta prevalencia había disminuido hasta el 15,2 y 15,4 por 100, respectivamente, pasados seis meses del atentado⁶⁹.

⁶⁸ Cfr. Echeburúa (2004), pág. 42.

⁶⁹ Cfr. Tobal *et al* (2005).

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Abadie, A. y Gardeazábal, J. (2003): “The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country”, *The American Economic Review*, vol. 93, nº 1, Marzo.
- Baca, E. *et al* (2003): “El Proyecto Fénix: un estudio sobre las víctimas del terrorismo en España. Resultados preliminares”, incluido en Baca y Cabanas (2003).
- Baca, E. y Cabanas, M.L. (2003): *Las víctimas de la violencia. Estudios psicopatológicos*, Triacastela, Madrid.
- Blanco, A., Del Águila, R. y Sabucedo, J.M. (Eds.) (2005): *Madrid 11–M. Un análisis del mal y sus consecuencias*, Editorial Trotta, Madrid.
- Bouchet–Saulnier, F. (2003): “Introducción al derecho internacional humanitario”, incluido en Gutman y Rieff (2003).
- Buesa, M. (Dir.) (2004): *Economía de la secesión. El proyecto nacionalista y el País Vasco*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
- Cairns, E. (1997): *A Safer Future: Reducing the Human Cost of War*, Oxfam Publications, Oxford.
- Carr, C. (2002): *Las lecciones del terror. Orígenes históricos del terrorismo internacional*, Ediciones B, Barcelona.
- Castells, M. y Serra, N. (Eds.) (2003): *Guerra y paz en el siglo XXI. Una perspectiva europea*, Tusquets, Barcelona.
- Clausewitz, C. von (1832): *Vom Kriege*, Ferdinand Dümmler, Berlín. Se cita de la edición española: *De la guerra*, La Esfera de los Libros, Madrid, 2005.
- Cockburn, A. (2002): “Diamantes. Su verdadera historia”, *National Geographic* (edición española), Vol. 10, nº 3, Marzo.
- Collier, P. *et al* (2003): *Breaking the Conflict Trap. Civil War and Development Policy*, World Bank–Oxford University Press, Washington.
- De la Guardia, J. (2002): “Palestina vive de la ayuda humanitaria”, *El País*, 11 de agosto.
- Drakos, K. y Kutan, A. (2001): *Regional effects of terrorism on tourism: evidence from three Mediterranean countries*, Zentrum für Europäische Integrationsforschung, Working Paper, nº B 26.
- Echeburúa, E. (2004): *Superar un trauma. El tratamiento de las víctimas de sucesos violentos*, Ediciones Pirámide, Madrid.
- Elorza, A. (2004a): “Terrorismo islámico: las raíces doctrinales”, incluido en Reinares y Elorza (Eds.) (2004).
- Elorza, A. (2004b): “Anatomía de la yihad en el Corán y los hadices”, incluido en Reinares y Elorza (Eds.) (2004).
- Elorza, A., Ballester, M. y Borreguero, E. (2005): “Terrorismo y religión”, incluido en Blanco, Del Águila y Sabucedo (Eds.) (2005).
- Enders, W. y Sandler, T. (1996): “Terrorism and Foreign Direct Investment in Spain and Greece”, *Kyklos*, vol. 49, nº 3.

- Gray, J.G. (2004): *Guerreros. Reflexiones del hombre en la batalla*, Inédita Editores, Barcelona.
- Gupta, S. *et al* (2002a): *Fiscal Consequences of Armed Conflict and Terrorism in Low and Middle-Income Countries*, IMF Working Paper, n° 02/142, Washington.
- Gupta, S. *et al* (2002b): “El evasivo dividendo de la paz”, *Finanzas & Desarrollo*, vol. 39, n° 4, Diciembre.
- Gutman, R. y Rieff, D. (2003): *Crímenes de guerra*, Editorial Debate, Barcelona.
- Hillman, R.J. (2002): *Terrorism Insurance: Rising Uninsured Exposure to Attacks Heightens Potential Economic Vulnerabilities*, US General Accounting Office, Washington.
- Hoeffler, A. y Reynal-Querol, M. (2003): *Measuring the Cost of Conflict*, Oxford University, Oxford.
- Ignatieff, M. (2001): *El honor del guerrero. Guerra étnica y conciencia moderna*, Suma de Letras, Madrid.
- Ignatieff, M. (2003): “Comité Internacional de la Cruz Roja”, incluido en Gutman y Rieff (2003).
- Ignatieff, M. (2004): “El terrorista como director de cine”, *El País*, 28 de noviembre.
- Ignatieff, M. (2005): *El mal menor. Ética política en una era de terror*, Taurus, Madrid.
- Kaldor, M. (2001): *Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global*, Tusquets Editores, Barcelona.
- Kaldor, M. (2003): “Haz la ley y no la guerra: la aparición de la sociedad civil global”, incluido en Castells y Serra (2003).
- Kaldor, M. (2004): *La sociedad civil global. Una respuesta a la guerra*, Tusquets Editores, Barcelona.
- Kennedy, P. (1994): *Auge y caída de las grandes potencias*, Globus Comunicación, Madrid.
- Kissinger, H. (1996): *Diplomacia*, Ediciones B, Barcelona.
- Laqueur, W. (2003): *Una historia del terrorismo*, Paidós, Barcelona.
- Lenain, P. *et al* (2002): *The economic consequences of terrorism*, OECD–Economics Department Working Papers, n° 334, Paris.
- Ludendorff, E. (1919): *Meine Kriegserinnerungen*, Berlin.
- Maalouf, A. (1999): *Identidades asesinas*, Alianza Editorial, Madrid.
- Miguel, J.J. (2005): “Resultados de la investigación sobre las consecuencias de los atentados del 11-M en Madrid”, Comunicado de prensa de la Sociedad Española para el estudio de la Ansiedad y el Estrés, Madrid, 4 de marzo.
- Münkler, H. (2002): *Die neuen Kriege*, Reinbeck bei Hamburg, Hamburgo.
- Myro, R. *et al* (2004): “Crecimiento económico y conflicto social en el País Vasco”, incluido en Buesa (Dir.) (2004).
- Nabulsi, K. (2003): “Guerra justa e injusta”, incluido en Gutman y Rieff (2003).

- Napoleoni, L. (2004): *Yihad. Cómo se financia el terrorismo en la nueva economía*, Ediciones Urano, Barcelona.
- OCDE (2002): “Conséquences économiques du terrorisme”, *Perspectives Économiques de l’OCDE*, n° 71, París.
- Ratner, S.R. (2003): “Agresión”, incluido en Gutman y Rieff (2003).
- Reinares, F. (1998): *Terrorismo y antiterrorismo*, Ediciones Paidós, Barcelona.
- Reinares, F. y Elorza, A. (Eds.) (2004): *El nuevo terrorismo islamista. Del 11-S al 1-M*, Temas de hoy, Madrid.
- Scholl-Latour, P. (2001): *Afrikanische Totenklage*, Munich.
- Schmidt, A.P. (2001): *Countering Terrorism through International Cooperation*, Milán.
- Smith, R. y Dunne, P. (2001): *Military expenditure growth and investment*, Birbeck College and Middlesex University Business School, Abril.
- Southworth, H.R. (1975): *La destrucción de Guernica*, Ruedo Ibérico, París.
- Stewart, F., Huang, C. y Wang, M. (2001): “Internal Wars in Developing Countries: An Empirical Overview of Economic and Social Consequences”, incluido en F. Stewart *et al*: *War and Underdevelopment*, vol. 1, Oxford University Press, Oxford.
- Thamm, H.G. (2001): “The Nexus between Arms Trade, Drugs and Terrorism”, incluido en Schmidt (2001).
- Thomas, G. y Morgan-Witts, M. (1986): *El día en que murió Guernica*, Plaza & Janes Editores, Barcelona.
- Todorov, T. (2002): *Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX*, Ediciones Península, Barcelona.
- Todorov, T. (2003): *El nuevo desorden mundial*, Ediciones Península, Barcelona.
- US-GAO (2002): *Review of the estimates for the Impact of the September 11, 2001, Terrorist Attacks on New York Tax Revenues*, US General Accounting Office, Washington.
- Velarde, J. (1987): “La economía del terror”, incluido en G. Sáenz de Buruaga: *Homenaje al Profesor Sampedro*, Fundación Banco Exterior, Madrid.
- Villamarín, L.A. (2005): *Narcoterrorismo. La guerra del nuevo siglo*, Ediciones Nowtilus, Madrid.
- Walzer, M. (2001): *Guerras justas e injustas*, Paidós, Barcelona.
- Walzer, M. (2004): *Reflexiones sobre la guerra*, Paidós, Barcelona.

ÚLTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS

- 25.- *Justificación de la política de innovación desde un enfoque teórico y metodológico.* Joost Heijs (2001).
- 26.- *Los sistemas nacionales de innovación: una revisión de la literatura.* Mikel Navarro (2001).
- 27.- *El análisis y la política de clusters.* Mikel Navarro (2001).
- 28.- *Los sistemas regionales de innovación del País Vasco y Navarra.* Mikel Buesa (2001).
- 29.- *Centralisation or dispersion?: a spatial analysis of the impact of the single market programme on the activity of us manufacturing affiliates.* Andrew Mold (2001)
- 30.- *El sistema regional de innovación de la Comunidad de Madrid.* Mikel Buesa (2002).
- 31.- *Economía de la secesión: Los costes de la 'No-España' en el País Vasco.* Mikel Buesa (2002).
- 32.- *The spanish public financial support accesible for small and medium sized firms: organisations, programmes, instruments and measures.* Joost Heijs (2002).
- 33.- *Los determinantes de la capacidad innovadora regional: una aproximación econométrica al caso español. Recopilación de estudios y primeros resultados.* Thomas Baumert y Joost Heijs (2002).
- 34.- *Recursos y resultados de los sistemas de innovación: elaboración de una tipología de sistemas regionales de innovación en España.* Mónica Martínez Pellitero (2002).
- 35.- *Medida de la capacidad innovadora de las Comunidades Autónomas: construcción de un índice regional de innovación.* Mónica Martínez Pellitero y Thomas Baumert (2003)
- 36.- *Innovación tecnológica y competitividad: análisis microeconómico de la conducta exportadora en México.* Salvador Estrada y Joost Heijs (2003).
- 37.- *Indicadores de la sociedad de la información en España.* Salvador Estrada (2003)
- 38.- *Los centros tecnológicos y el sistema regional de innovación. El caso del País Vasco.* Mikel Navarro Arancegui y Arantza Zubiaurre Goena (2003).
- 39.- *Ciencia y Tecnología en la España democrática: la formación de un sistema nacional de innovación.* Mikel Buesa (2003).

- 40.- *Las empresas del País Vasco ante la secesión* Mikel Buesa, Joost Heijs, Thomas Baumert y Mónica Martínez Pellitero (2003)
- 41.- *Difusión y adicionalidad de las ayudas públicas a la innovación: una estimación basada en "propensity score matching"*. Liliana Herrera y Joost Heijs (2004).
- 42.- *Relaciones e interacción entre los agentes del sistema nacional de innovación de España: resultados de la encuesta-IAIF/FECYT*. Joost Heijs, Andrés Fernández Díaz, Patricia Valadez y Alicia Coronil (2004).
- 43.- *Evaluación de la efectividad de la política de cooperación en la innovación*. Joost Heijs, Andrés Fernández Díaz, Patricia Valadez y Alicia Coronil (2004).
- 44.- *Patrones regionales de uso y consumo de TIC'S: hacia un índice regional de la Sociedad de la Información*. Salvador Estrada (2004). (Disponible en inglés)
- 45.- *Configuración estructural y capacidad de producción de conocimientos en los sistemas regionales de innovación: Un estudio del caso español*. Mikel Buesa, Joost Heijs, Mónica Martínez Pellitero y Thomas Baumert (2004). (Disponible en inglés)
- 46.- *The distribution of R&D subsidies and its effect on the final outcome of innovation policy*. Joost Heijs and Liliana Herrera (2004).
- 47.- *El papel de las empresas extranjeras en el desarrollo tecnológico de España*. Joost Heijs (2004).
- 48.- *Technological behaviour and export performance: a non linear relationship*. Salvador Estrada y Joost Heijs (2004).
- 49.- *Unidad de mercado y secesión: el caso del país Vasco*. Mikel Buesa (2005).
- 50.- *Guerra y Terrorismo: El modelo de economía depredadora de la guerra*. Mikel Buesa (2005).

Normas de edición para el envío de trabajos:

Texto: Word para Windows

Tipo de letra del texto: Times New Roman 12 Normal

Espaciado interlineal: Sencillo

Tipo de letra de las notas de pie de página: Times New Roman 10 Normal

Numeración de páginas: Inferior centro

Cuadros y gráficos a gusto del autor indicando programas utilizados

En la página 1, dentro de un recuadro sencillo, debe figurar el título (en negrilla y mayúsculas), autor (en negrilla y mayúsculas) e institución a la que pertenece el autor (en letra normal y minúsculas)

En la primera página del trabajo, se deberá incluir un *Resumen* en español e inglés (15 líneas máximo), acompañado de *palabras clave*

Los trabajos habrán de ser enviados en papel y en soporte magnético a la dirección del Instituto de Análisis Industrial y Financiero.